

General Roca, 10 de febrero de 2026

VISTOS Y CONSIDERANDO: Estos autos caratulados **ROLDAN RICARDO HORACIO C/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL ROCA S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (L) (EXPEDIENTE N° RO-09184-L-0000)** venidos al acuerdo a efectos de realizar el juicio de admisibilidad del recurso de casación interpuesto por la demandada.

A la cuestión planteada, las **Dras. Daniela Perramon y María del Carmen Vicente**, dijeron:

I.- Que contra la sentencia definitiva de fecha 14 de noviembre de 2025 se alza la parte demandada interponiendo recurso de casación por arbitrariedad en la valoración de la prueba, inobservancia y/o errónea aplicación de la ley y errónea aplicación de la doctrina legal y del corpus iuris internacional en cuestiones de género.

Comienza la recurrente apuntando el cumplimiento de los requisitos formales de admisibilidad, señalando que el recurso ha sido interpuesto dentro del plazo legal de diez días conforme el art. 62 de la Ley 5631, contra una sentencia definitiva, constituyendo domicilio en la ciudad de Viedma. Asimismo, manifiesta que el monto del litigio no es susceptible de apreciación pecuniaria, encuadrándose en el último párrafo del art. 251 del CPCyC, y que se encuentra exenta del depósito previo por tratarse de un ente público, conforme doctrina del Superior Tribunal de Justicia sobre el principio *fiscus semper solvens*.

Continúa con una breve reseña de los antecedentes de la causa a fin de dar cumplimiento con la autosuficiencia de su presentación y finalmente ingresa en los agravios en concreto, los que se detallan a continuación:

a) Arbitraria valoración de la prueba: La quejosa sostiene que el Tribunal de grado incurrió en arbitrariedad al efectuar una aplicación retroactiva de la Acordada 05/2022 del STJ —posterior a los hechos— para valorar la prueba de videograbación. Argumenta que la sentencia en crisis

se aparta de la pericia al omitir la distinción técnica realizada por la perito informática entre "fiabilidad" y "validez" de la prueba digital, en donde explicó que las deficiencias en la cadena de custodia afectan principalmente el grado de confianza o fuerza convictiva del elemento mas no lo tornan inválido, pudiéndose acudir a técnicas supletorias de control. Destaca que la experta, aun reconociendo fallas en la cadena de custodia, aplicó técnicas supletorias, dejando constancia que no puede precisar qué se modificó en el archivo de video, pero no afirma en ningún momento que el contenido haya sido manipulado ni que el material deba descartarse por inválido.

Ignora la conclusión de la experta que confirma, a partir de las imágenes originales y el video reconstituido, se observa al actor realizando los actos imputados. Asimismo, reprocha que la sentencia no haya analizado la prueba residual producida en expediente, como la denuncia de la Sra. Capua y las testimoniales rendidas.

b) Inobservancia y/o errónea aplicación de la ley: La recurrente afirma que la revisión judicial debe limitarse a los argumentos planteados en sede administrativa bajo el principio de congruencia. Alega que el actor nunca impugnó la autenticidad de las imágenes ni argumentó que fueran falsas durante el sumario, limitándose a cuestionar la cadena de custodia. Sostiene que el tribunal convirtió el contencioso en un nuevo sumario, sustituyendo a la Junta de Disciplina en la apreciación de los hechos y de la prueba.

c) Errónea aplicación de la doctrina legal y del corpus iuris internacional en cuestiones de género: Se agravia porque la Cámara consideró la diferencia de fechas entre la grabación y la denuncia como un condicionante para evaluar la prueba. Aduce que esto contraviene la Convención de Belém do Pará y la Ley 26.485 en cuanto al resguardo a víctimas de violencia de género, quienes denuncian cuando su psiquis lo permite, dado el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran. Finalmente, sostiene que la sentencia reduce la perspectiva de género a un

párrafo declarativo y la neutraliza mediante un estándar probatorio impropio de un procedimiento disciplinario.

Hace reserva del caso federal.

Corrido el traslado, la parte actora contesta solicitando el rechazo del recurso. Señala que el mismo incumple con la Acordada 09/23 en cuanto a la cuestión formal para conceder el recurso. Asimismo, y en relación a lo sustancial, sostiene que la demandada pretende revisar cuestiones de hecho y valoración de prueba ajenas a la casación, citando doctrina del STJ ("Rivieri"). Defiende la sentencia argumentando que la pericia informática acreditó que el archivo fue adulterado en dos fechas distintas (01/12/2019 y 06/12/2019) con posterioridad al inicio del sumario. Cita leading case "Baena" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en referencia a la exigencia de la aplicación de todas las garantías procesales en el procedimiento sumarial administrativo. Niega que no se hayan planteado nulidades en sede administrativa, referenciando recursos presentados el 24/07/2020 y 13/10/2020 donde se impugnó el procedimiento.

Por decreto del 30 de diciembre de 2026 se ordena el pase de los autos al acuerdo para resolver.

II.- ADMISIBILIDAD EN SENTIDO FORMAL: Del análisis de los requisitos de admisibilidad formal, y teniendo en cuenta las pautas de la Acordada 9/23 STJ, surge que el recurso fue interpuesto dentro del término de ley (art. 62 de la Ley 5631) y contra una resolución definitiva. En cuanto al monto del litigio, tratándose de una acción con objeto -mayormente- indeterminado, no se puede verificar el requisito. Con respecto al depósito del art. 65 de la ley 5631, la parte la demandada se encuentra exenta, en razón de su carácter estatal.

III.- ADMISIBILIDAD EN SENTIDO SUSTANCIAL: Corresponde ingresar en el estudio y la evaluación de la verosimilitud de los fundamentos que sustentan la pretensión recursiva de la parte demandada, atento a la extraordinaria revisión de

legalidad de los fallos que supone este medio de impugnación.

En cuanto a la crítica relativa a la arbitrariedad de sentencia sin identificar pormenorizadamente el yerro lógico en el razonamiento, excede cualquier reproche concreto para erigirse en una crítica y disenso a las opiniones de la posición de la decisión.

En efecto, la recurrente invoca que la sentencia ha incurrido en arbitrariedad al momento de valorar la prueba al realizar observaciones parciales, tanto de la pericia informática realizada, como de las declaraciones testimoniales y del propio testimonio de la víctima, además de valorar la prueba de videgrabación a la luz de una acordada posterior a la realización del referido video (Ac. 5/2022 STJ).

Sabido es que la valoración relativa a las cuestiones de hecho y prueba, son exclusivas del grado y resultan ajenas a la instancia extraordinaria (cf. STJRNS3: Se. 84/18 "Pondal"; Se. 07/20 "Villalba"; Se. 17/23 "Riquelme", entre otras).

Si bien es cierto que esta regla puede ceder ante un supuesto de absurdo o arbitrariedad manifiesta, el recurrente no logra demostrar en su presentación un vicio lógico en el razonamiento del sentenciante o una grave desinterpretación de la prueba que lleve a conclusiones contradictorias o insostenibles.

En este sentido es útil recordar que -como principio general- los jueces laborales tienen un amplio espectro de evaluación de las pruebas (art. 55 inc. 1 Ley P N° 5631), tarea en la que sólo están limitados por la prudencia jurídica y en la que pueden escoger los elementos de juicio prefiriendo unos y desechando otros. Poseen, por tanto, la facultad de seleccionar las pruebas y atribuirles la jerarquía que en cada caso les corresponda, sin olvidar que la regla de apreciar es valorar, ponderar y comparar para decidir (cf. STJRNS3: Se. 76/17 "QBE Argentina ART SA", Se. 128/20 "La Segunda ART S.A." entre otros).

Si bien es cierto que la doctrina del Máximo Tribunal Provincial admite excepcionalmente la posibilidad de revisar en casación tópicos de esa naturaleza cuando se demuestre -prima facie- la concurrencia de un eventual supuesto de absurdo notorio o arbitrariedad, también lo es que tales excepcionales anomalías no pueden fundarse -como sucede aquí- en la disconformidad del recurrente con la tesis del Tribunal de grado, lo que de ningún modo habilita la extraordinaria vía intentada.

Por el contrario, los argumentos invocados por la parte recurrente constituyen una mera discrepancia subjetiva con el criterio adoptado en la sentencia impugnada. Tales planteos no logran desvirtuar el razonamiento desarrollado en dicho pronunciamiento a

partir de las probanzas agregadas en autos, y ponderadas por el voto rector, sino que además no sólo tuvo en cuenta la acordada citada, sino un conjunto normativo aplicable a la materia que, en su integridad, conduce a la conclusión alcanzada en la resolución. En consecuencia, lo expuesto resulta insuficiente para habilitar la vía extraordinaria respecto del agravio planteado.

Tampoco podrá prosperar el agravio vinculado a la supuesta inobservancia o errónea aplicación de la ley, toda vez que no se advierte la alegada vulneración al principio de congruencia entre lo actuado en sede administrativa y lo sometido a conocimiento de la instancia judicial y, posteriormente, resuelto en la sentencia atacada.

Finalmente, corresponderá también desestimar el agravio relativo a la violación del plexo normativo relativo a la perspectiva de género, desde que dicha mirada podría incidir en la valoración de los actos sometidos a consideración de la magistratura, mas no tiene virtualidad para anular la aplicación del derecho aplicable a la resolución del caso, puesto que tal prescindencia configura arbitrariedad y ataca el derecho de defensa en juicio (cf. STJRNS3: Se. 69/2025 "Vazquez"). En cuanto a la pretendida violación a la doctrina legal sobre esta temática, no habiéndose identificado concretamente la misma, el agravio debe ser desestimado.

Por todo lo expuesto, corresponde declarar inadmisibile el recurso de casación intentado por la parte demandada, con costas.

A la misma cuestión, el **Dr. Victorio Gerometta**, expresa que atento la coincidencia de los votos precedentes, se abstiene de emitir opinión. (Conf. art. 55 inc. 6) de la ley 5631).

Por todo lo expuesto, **LA CÁMARA SEGUNDA DEL TRABAJO DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN ESTA CIUDAD; POR MAYORÍA, RESUELVE:**

I. DECLARAR INADMISIBLE el recurso extraordinario interpuesto por la parte demandada contra la sentencia definitiva dictada en autos, por los motivos expuestos en el considerando.

II. Costas a cargo de la demandada (cf. art. 31 Ley 5631 y art. 62 del CPCyC),

regulando honorarios a favor de los Dres. Miguel Ángel Beteluz y Fernando Andrés Carrasco, en la suma de \$399.810 (MB: \$1.332.702 x 30%) y del Dr. Juan Pablo Urquiaga en la suma de \$237.982 (MB: \$951.930 x 25%).

III. Regístrese, notifíquese conforme art. 25 de la Ley 5631 y cúmplase con Ley 869.

DRA. DANIELA A.C. PERRAMON - Jueza de Cámara

DRA. MARÍA DEL CARMEN VICENTE - Jueza de Cámara

DR. VICTORIO GEROMETTA - Juez de Cámara

El instrumento que antecede ha sido firmado digitalmente en los términos y alcances de la Ley Nac. 25.506 y Ley A 3997, Res. 398/05 y Ac. 12/18 STJ.

Ante mí: DRA. MARÍA EUGENIA PICK - Secretaria

Unidad Procesal Laboral N° 3-